

- De la Guardia, A.: *González Pacheco*. Ediciones Culturales Argentinas. Serie Cuadernos. Buenos Aires, 1963.
- De la Rosa, M. F.: “Una alternativa diferente: el teatro libertario (1910 - 1930)” en *Temas de historia Argentina y Americana*, n° 12. Pontificia Universidad Católica Argentina. Instituto de Historia Argentina y Americana, 2008.
- Dubatti, J. “La inundación” (1917) de Rodolfo González Pacheco: progreso, justicia y libertad en un drama antiburgués” en *La revista del CCC*. Año 3. Edición N° 9/10, 2010.
- Etchenique, J.: *Pampa Libre. Anarquistas en la pampa argentina*. Segunda Edición. Ediciones CPE. Editorial Voces. Santa Rosa – La Pampa, 2011.
- González Pacheco, R.: *Teatro completo*. Tomo I y II. Editorial Américalee. Buenos Aires, 1953.
- González Pacheco, R.: *Carteles 1. Del entrevero (selección)*. Folletos Libertad de Ediciones ¡Libertad!. Link: <http://folletoslibertad.angelfire.com/Pachecol.pdf>.
- Pérez, D. E. “González Pacheco. Tandilense, escritor y polémico anarquista”. En Versión digital: <http://historiando.escribirte.com.ar/13531.htm> . Consultado el 10/07/2011, 2009.
- Perinelli, R.: “*El teatro anarquista y un autor anarquista, Rodolfo González Pacheco*”. Versión digital: [http://www.teatrodelpueblo.org.ar/sobretodo/05\\_sobre\\_autores\\_y\\_obras/perinelli002.htm](http://www.teatrodelpueblo.org.ar/sobretodo/05_sobre_autores_y_obras/perinelli002.htm)
- Proudhon, P. J.: *El principio federativo*. Libros de Anarres. Buenos Aires, 2008.
- Sartelli E.: “Celeste, blanco y rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica (1912-22)” en *Razón y Revolución* n° 2. Buenos Aires, 1996.
- Suriano, J. *Anarquistas. Cultura y Política Libertaria en Buenos Aires 1890 – 1910*. Buenos Aires. Manantial, 2001.
- Viñas, D.: *Anarquistas en América Latina*. Segunda Edición. Paradiso, 2009.

Recibido: 9/8/2011 Aceptado: 7/10/2011

## *Revolución y contrarrevolución en los ‘70*

### **Las burguesías latinoamericanas y los golpes contrarrevolucionarios en la década de 1970: los casos de Chile y Argentina**

*Gonzalo Sanz Cerbino*

IEALC-UBA

#### **Resumen**

En el presente trabajo analizaremos el comportamiento de las burguesías argentina y chilena durante los años previos a la instauración de los regímenes militares de Videla y Pinochet. Nos ocuparemos de reconstruir la acción política de esta clase, que se destaca por la intervención abierta en la arena política, recurriendo a *lockouts*, movilizaciones y pronunciamientos, con una recurrencia marcada hacia la acción directa. En ambos casos, sus acciones se orientaban a generar las condiciones para la consumación del golpe de estado, buscando desestabilizar a los gobiernos democráticos y socavar su legitimidad. Tal grado de movilización de la clase dominante, poco común, se explica como respuesta a la amenaza que implicaba el ascenso de la lucha de clases y los procesos revolucionarios abiertos desde fines de la década de 1960 en ambos países.

**Palabras clave:** Contrarrevolución – Burguesía – Corporaciones empresariales

#### **Abstract**

In this paper we analyse the behaviour of the bourgeoisie in Argentina and Chile during the previous years before the establishment of the military regimes of Videla and Pinochet. We will rebuild the political action of this class, which is characterized by open intervention in the political sand, using lock outs, demonstrations and uprisings, with a strong recurrence towards direct action. In both cases, their actions were directed to create the conditions for the consummation of the coup, seeking to destabilize democratic governments and undermine its legitimacy. We explain this unusual degree of mobilization of the dominant class as a response to the threat that implied the rise of class struggle and the revolutionary processes opened since the late 1960s in both countries.

**Keywords:** Counterrevolution - Bourgeoisie - Coup D' État

Desde fines de los '60, tanto en Argentina como en Chile se asiste a la apertura de un proceso revolucionario. En Argentina, podemos datar la apertura de dicho proceso en 1969, cuando se abre un ciclo insurreccional que expresó el surgimiento de una Fuerza Social Revolucionaria, compuesta por una fracción de la clase obrera y una fracción de la pequeño burguesía que, con independencia de las distintas fracciones de la clase dominante, se enfrentan al régimen dictatorial y, objetivamente, comienzan a cuestionar las bases de la dominación capitalista. Este proceso entró en un impasse en 1973, cuando la apertura democrática y la instauración de un régimen bonapartista, logró cooptar a fracciones de la alianza revolucionaria y detener su ofensiva. Hacia 1975, el proceso se relanzó, al tiempo que la clase dominante se unificó detrás del programa de la contrarrevolución, que buscaba cerrar la crisis disciplinando a la clase obrera y eliminando a su vanguardia.

En el caso chileno, podemos datar la apertura del proceso revolucionario hacia 1967. La desilusión frente a las promesas incumplidas y el giro represivo del gobierno reformista de Eduardo Frei, de la Democracia Cristiana (DC), volcó a las masas a la acción directa. La caída de los precios internacionales del cobre, principal producto de exportación, y dos años consecutivos de recesión económica, marcan el fin del tibio reformismo de Frei. La virtual paralización de la reforma agraria prometida, el recorte en los programas de asistencia social y la caída salarial por el avance de la inflación serán sus consecuencias sociales. La respuesta de las masas a la desilusión será la profundización de la lucha de clases. Desde 1967, se multiplicaron las huelgas por reclamos salariales, las manifestaciones callejeras y los enfrentamientos con las fuerzas del orden. La represión se cobró, durante el período, varias bajas. Se generalizó el recurso a la acción directa por parte de las masas, especialmente las tomas de tierras en el campo, reclamando su expropiación, las tomas de fábricas y terrenos urbanos para la edificación de viviendas. También se vivió una gran agitación en el movimiento estudiantil universitario, que comenzó una rebelión que se extendió rápidamente por todo el país, reclamando la democratización de las viejas estructuras universitarias. La Revolución Cubana influyó sobre la radicalización de la juventud de los partidos marxistas tradicionales, aunque no cuajó importantes rupturas. De este proceso surgió el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), que entre 1967 y 1969 comenzó a realizar acciones armadas.

La efervescencia revolucionaria será encauzada dentro de los marcos de la legalidad burguesa por un nuevo experimento reformista,

## Introducción

La bibliografía sobre los golpes de estado de la década de 1970 es abundante, aunque ciertos aspectos de estos procesos han sido dejados de lado. Muchos se han abocado al análisis de las fuerzas de izquierda que intervinieron en los procesos, las organizaciones político-militares, los sindicatos y la clase obrera. Algunos menos se han ocupado de los defensores del status-quo: el accionar paramilitar, las Fuerzas Armadas o la intervención norteamericana, a través de la CIA u otros organismos. Sin embargo, son muchos menos los que escribieron sobre la intervención de las burguesías locales en la preparación de los golpes, que no se niega, pero tampoco se estudia. Se pasa por alto, de esta manera, un fenómeno propio de estos procesos: la intervención abierta de la clase dominante en la confrontación política. En este artículo, nos proponemos analizar los casos de Chile y Argentina. En concreto, nos ocuparemos de la intervención de la burguesía para generar las condiciones e impulsar las salidas contrarrevolucionarias que se hicieron efectivas con los golpes militares de Augusto Pinochet (Chile, 1973) y Jorge Rafael Videla (Argentina, 1976).

Las décadas de 1960 y 1970 en Latinoamérica se caracterizaron por el ascenso de la lucha de clases y el crecimiento de las organizaciones de izquierda que planteaban una salida revolucionaria. En algunos países, donde el incremento de la conflictividad deriva en una disputa por el poder entre Fuerzas Sociales, podemos hablar de la apertura de procesos revolucionarios. Estos procesos tienen particularidades a escala nacional, que es conveniente no perder de vista.

encabezado esta vez por la alianza entre el Partido Comunista (PC) y el Partido Socialista (PS), que se nutre de la ruptura por izquierda de la DC, con la incorporación del MAPU (Movimiento Acción Popular Unificado) al frente electoral. Este frente, la Unidad Popular (UP), se alzó con el triunfo en las elecciones de 1970, llevando a Salvador Allende a la presidencia. Asistimos de esta manera al entronizamiento de un gobierno de carácter bonapartista, que a través de su acción retrasó el avance revolucionario y concedió a la contrarrevolución el aire necesario para cerrar, tres años más tarde, el proceso. El gobierno de Allende no contó con un gran margen de maniobra para desplegar su impronta reformista. Se vio jaqueado, por izquierda, por los sectores revolucionarios que, dentro de su alianza o fuera, impulsaban el proceso más allá de los estrechos límites de legalidad burguesa. Y por derecha, por las corporaciones de la clase dominante y los partidos burgueses (Partido Nacional –PN- y DC), que se sirvieron de las plazas conquistadas anteriormente (el Parlamento, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas), las acciones paramilitares y los *lock outs* patronales, para cerrar el proceso mediante un golpe de estado destinado a masacrar a las fuerzas revolucionarias. En este marco, se desarrollará el proceso de luchas que analizaremos en el presente artículo, posando nuestra lente sobre la acción política desplegada por la burguesía y por las corporaciones que expresaban sus intereses.

### Los golpistas argentinos: de los paros comerciales agrarios a la conformación de APEGE

La apertura democrática de 1973 y el retorno de Juan Domingo Perón generaron un impasse en el proceso revolucionario abierto en 1969. Algunas de las fracciones de la clase obrera y de la pequeño burguesía que formaban parte de la Alianza Revolucionaria sucumbieron a las ilusiones reformistas que el retorno de Perón reeditaba. El resultado fue un reflujo de las luchas, aprovechado por la alianza contrarrevolucionaria para preparar el golpe final contra las fuerzas revolucionarias. El tibio programa reformista que intentó aplicar el peronismo no pudo relanzar la acumulación ni poner un freno a los conflictos obreros, que comenzaron a estallar a poco de asumido el nuevo gobierno. La insurgencia tampoco pudo ser erradicada mediante el accionar paramilitar, impulsado desde el propio gobierno peronista. Las tensiones siguieron acumulándose hasta que, en 1975, comenzaron a estallar. Ante el fracaso de la alianza reformista para dar salida a la crisis, la contrarrevolución comenzó su ofensiva contra el gobierno. Los

primeros golpes partieron de la burguesía agraria, particularmente afectada por la política oficial.

Durante 1975, se realizaron cinco paros agrarios de alcance nacional, en los que se destacó la participación de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), encabezada por su fracción pampeana, CARBAP (Confederaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), de la Federación Agraria Argentina (FAA) y de la Sociedad Rural (SRA). Además, se realizaron once paros de alcance regional, que incluyeron cortes de ruta, movilizaciones y llamados a la rebelión fiscal<sup>1</sup>. El primer paro comercial de alcance nacional tuvo una duración acotada, de 24 horas, pero constituyó el inicio de una ofensiva sin precedentes de la burguesía agraria. Fue convocado para el 3 de marzo por el Comité de Acción Agropecuaria (CAA), que reunía a SRA, CRA y CONINAGRO. La medida alcanzó, según sus organizadores, un acatamiento del 90%, y fue acompañado por medidas de acción directa tendientes a garantizarlo, como el ataque a los camiones que intentaron transportar productos agrarios.

A poco de finalizado el paro, las corporaciones que lo impulsaron manifestaron diferencias sobre la continuidad de la ofensiva. Mientras que CRA y CARBAP se pronunciaron a favor de convocar a un nuevo paro comercial, CONINAGRO y SRA se mostraron más cautos. Estas diferencias no pudieron salvarse, llevando a la ruptura del CAA. Sin embargo, esto no implicó el fin de la ofensiva. Una nueva alianza, constituida por CRA y FAA, tomó la posta convocando a un nuevo paro (ganadero), esta vez por tres días, que se concretó entre el 19 y el 21 de mayo. La SRA retomó el camino de los paros comerciales en junio, al sumarse al paro comercial por tres días convocado por el Comité de Defensa de la Producción Lechera, junto a CRA y la FAA<sup>2</sup>.

Hasta este momento, los reclamos de la burguesía agraria fueron mayormente gremiales: en particular, el mejoramiento del precio de sus productos, que eran fijados por el Estado a través de distintos mecanismos de regulación. Sin embargo, la naturaleza de los reclamos cambió a partir de junio, cuando el fracaso del plan económico que intentó implementar el ministro Celestino Rodrigo puso sobre la mesa que la resolución de los problemas económicos demandaba una solución

<sup>1</sup>Algunos de estos paros regionales fueron impulsados por las Ligas Agrarias y parecen no ser parte de la misma ofensiva. Queda para futuros trabajos un análisis detallado de estas acciones. Ver: Sanz Cerbino, G.: “Tiempos violentos. Los paros agrarios de 1975 y la estrategia golpista de la burguesía”, *Anuario CEICS*, N° 3, 2009.

<sup>2</sup>Idem.

política previa. El gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó un violento giro en materia económica con el nombramiento de Rodrigo, que asumió el 2 de junio de 1975. Su programa consistió en un brusco descenso de los salarios reales, que apuntaba a constituirse en el primer escalón de un relanzamiento de la acumulación de capital por la vía de un aumento de la explotación. El plan se basó en una importante devaluación de la moneda y un fuerte aumento de precios y tarifas, que no fueron acompañados por aumentos salariales, a los que el gobierno fijó un tope menor al aumento de precios. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “El Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaban la tradicional conducción de la burocracia sindical, en una escalada que amenazaba las propias bases de la dominación social<sup>3</sup>.

Como veremos, el fracaso del plan pondrá al conjunto de la burguesía en pie de guerra. La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, marcó un punto de inflexión. Desde este momento la burguesía relanzó su ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. Esto se observa, por un lado, en la radicalización de los discursos. Comienzan a reiterarse con insistencia una serie de elementos: en primer lugar, la caracterización de la situación como una crisis general, económica, política y social, producto de los errores del gobierno. A su vez, aumentan las referencias al problema de la “subversión”, con la que se hace referencia ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también a las fracciones de la clase obrera que actuaban bajo la dirección de la izquierda, la “guerrilla fabril”. Por último, se insiste una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al “restablecimiento del orden”, con claras connotaciones golpistas<sup>4</sup>.

Un ejemplo de ello es el discurso pronunciado por Jorge Aguado, presidente de CARBAP y futuro funcionario de la dictadura el 24 de julio de 1975<sup>5</sup>. Allí se refirió negativamente a la situación nacional y responsabilizó al gobierno, al que atacó con gran virulencia. Aguado

caracterizó que la Nación se encontraba ante “una crisis general”, que comprometía la existencia misma del poder del Estado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre los argentinos y la estabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles, ya que “fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda”. La alusión al fantasma de la subversión, que reavivó la reacción popular al Rodrigazo, era clara. Cerró su discurso señalando que los productores rurales estaban dispuestos a luchar por devolver al país “tres factores fundamentales”: autoridad, seguridad y confianza. Ese reclamo era una clara invocación al golpe militar.

El endurecimiento de las posiciones precedió a la convocatoria a nuevas medidas de fuerza. A fines de agosto, el frente conformado por CRA y FAA convocó a un paro comercial ganadero de once días, que se realizaría entre el 19 y el 29 de septiembre, al que se sumó SRA a último momento. El paro se cumplió con un gran acatamiento en todo el país, acompañado por movilizaciones y cortes de ruta. Contó con la solidaridad de sectores del comercio y de la industria, que realizaron cierres y apagones en solidaridad. También recibió el respaldo de algunos partidos políticos. Finalizada la medida, las entidades convocantes mantuvieron el estado de alerta y abrieron un paréntesis de diez días para retomar el diálogo con el gobierno. Las reuniones con las autoridades nacionales se sucedieron vertiginosamente, sin que las promesas oficiales pudieran torcer la voluntad de las corporaciones rurales de ir a un nuevo paro.

El siguiente paro comercial, quinto y último de 1975, fue convocado para el 24 de octubre por CRA, FAA y SRA, y tuvo una duración de dieciocho días<sup>6</sup>. El anuncio repentino y su extensión tomaron por sorpresa al gobierno, que no pudo acumular stocks de hacienda. El masivo acatamiento tuvo, entonces, importantes consecuencias: su resultado fue un pronunciado desabastecimiento y el aumento en los precios de la carne y de sus substitutos, que en un contexto inflacionario eran una bomba de tiempo. Frente a la escalada, el Ministerio de Economía fijó precios máximos para todos los cortes de carne y amenazó con aplicar la ley de abastecimiento expropiando hacienda. Sin embargo, las medidas tomadas no fueron efectivas: los dueños de carnicerías salieron a denunciar que el producto no llegaba a los precios fijados por el gobierno, y declararon un *lock out* hasta que se garantizase el abastecimiento

<sup>3</sup>Löbbe, H.: *La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976)*, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009; Kandel, P. y M. Monteverde: *Entorno y caída*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1976.

<sup>4</sup>Sanz Cerbino, op. cit.

<sup>5</sup>Aguado, J.: *Cuatro años de acción gremial*, CARBAP, Buenos Aires, 1977, pp. 157-163.

<sup>6</sup>*La Nación*, 22 y 23/10/75.

a los precios oficiales<sup>7</sup>. Este nuevo paro contó con el respaldo de varios partidos políticos y de las corporaciones empresarias más importantes del país. Se produjeron movilizaciones, concentraciones, cortes de ruta y cierres de comercios en solidaridad en varias ciudades del interior. A su vez, el gobierno denunció la existencia de amenazas y atentados contra aquellos que no se habían sumado a la medida de fuerza<sup>8</sup>.

Una vez concluido el paro, la ofensiva de la burguesía no cesó. Las declaraciones y los pronunciamientos aumentaron su virulencia a medida que la crisis se profundizaba. Las amenazas de nuevos paros eran casi diarias y ya se hablaba abiertamente del golpe de estado en todos los ámbitos. En el marco de esta ofensiva, la burguesía conformó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que se constituyó en el núcleo del partido del orden<sup>9</sup>. El origen formal de APEGE se remontaba a agosto del '75, producto directo del fracaso del "Rodrigazo". Como decíamos, este hecho constituyó un punto de inflexión, que sacudió a la burguesía y la puso en pie de guerra: fue la constatación de que la salida a la crisis de acumulación no podría alcanzarse si previamente no se derrotaba en el plano militar a la clase obrera y a su vanguardia. Como veremos, este va a ser el programa de APEGE.

La entidad surgió de las reuniones sostenidas por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), y CARBAP. Al poco tiempo se sumaron SRA y la Cámara Argentina de Sociedades Anónimas (CAMSACOM)<sup>10</sup>. Estas corporaciones integraron su dirección, el Secretariado Ejecutivo, constituido en septiembre<sup>11</sup>. A fines de octubre, se realizó una reunión plenaria en la que se votó un programa, refrendado por las bases empresarias en tres asambleas simultáneas el 13 de diciembre de 1975<sup>12</sup>. El programa tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, y asociado a este, eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los

<sup>7</sup>La Nación, 31/10/75, 1/11/75 y 5/11/75.

<sup>8</sup>La Nación, 6/11/75.

<sup>9</sup>Ver: Sanz Cerbino, G.: "El huevo de la serpiente. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias y el golpe de estado de 1976", *Realidad Económica*, n° 251, abril-mayo de 2010.

<sup>10</sup>La Nación, 19/9/75.

<sup>11</sup>La Nación, 15/9/75.

<sup>12</sup>La Nación, 23/10/75 y 14/12/75.

instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones internas dominadas por la izquierda revolucionaria. En tercer lugar, se reclamó un recorte de los gastos estatales y eliminar los aumentos de impuestos que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía captada por el Estado a sostener empresas ineficientes y transferencias hacia la clase obrera. Por último, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir.

Como lo demostró el fracaso del Rodrigazo, este programa no podría implementarse en los marcos de la democracia burguesa. El disciplinamiento de la clase obrera y la eliminación de su vanguardia, requisitos indispensables para su implementación, solo podrían obtenerse bajo un régimen de excepción. Por eso, estas fracciones de la burguesía concentraron su acción en generar las condiciones para el golpe. Mientras APEGE y las corporaciones empresarias que la integraban avanzaban en su acción de desgaste del gobierno democrático, encolumnando al conjunto de la burguesía tras su estrategia y buscando neutralizar cualquier atisbo de resistencia al golpe, el personal técnico que llevaría a cabo el programa, los militares que encabezaron el golpe, fueron ubicándose en sus posiciones. Por debajo de la mesa, civiles y militares ultimaban detalles. Algunas de estas negociaciones han trascendido, como la reunión que mantuvo el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en noviembre de 1975, con dirigentes de SRA. Allí se manifestó la preocupación por el avance de la "subversión", a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno: "La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos"<sup>13</sup>.

Pero, como decíamos, para dar el golpe, y para que este pudiera llevar adelante las tareas que demandaba el aniquilamiento de la Fuerza Social Revolucionaria, era necesario generar las condiciones políticas que lo hicieran posible. Esto es, obtener el mayor apoyo posible para este programa. Y en los casos en que no se consiguiera el apoyo, obtener por lo menos una neutralidad que garantizara la menor resistencia

<sup>13</sup>SRA: *Memoria y Balance 1976*.

al golpe. Por eso, la disputa política más importante del momento pasó por demostrar que el gobierno reformista era incapaz de encausar la situación. A su vez, el desgaste a que se sometía al gobierno apuntaba a minar el apoyo que tenía dentro de la clase obrera, buscando evitar que a la hora decisiva salieran a defenderlo.

A eso apuntaba la ofensiva final encabezada por APEGE, que comenzó a fines de 1975 y culminó con el golpe de marzo de 1976. El factor aglutinante fue el intento gubernamental de imponer una reforma impositiva, que rápidamente se ganó el repudio del conjunto de la burguesía. Los primeros comunicados del año ya amenazaban con la convocatoria a un *lock out* que aglutinaría al conjunto del empresariado, medida que consiguió el respaldo de las bases empresarias en la asamblea del 28 de enero de 1976. La fecha fijada para la medida de protesta fue el 16 de febrero, y los reclamos no se concentraron sólo en la reforma fiscal sino que exigieron un drástico giro en la política económica: reducción del gasto público, reducción de la carga fiscal, derogación de la legislación laboral, eliminar a las comisiones internas y el activismo sindical de las fábricas, liquidar a la subversión y restablecer el orden<sup>14</sup>.

A lo largo de las dos primeras semanas de febrero fueron llegando adhesiones de distintas cámaras al *lock out*, votadas en centenares de asambleas a lo largo de todo el país. Incluso la CGE, que todavía mantenía su respaldo al gobierno, se vio obligada a endurecer su discurso, convocar a tibias medidas de protesta e incluso, dejar en libertad de acción a sus bases que decidieran sumarse a la medida de APEGE, luego de haber condenado públicamente el *lock out*. Es que la atracción que generaba el programa de APEGE comenzó a erosionar las bases de la CGE, hecho que se manifestó en la ruptura de buena parte de las entidades que la componían con su dirección y el alineamiento con los empresarios golpistas.

El *lock out* contó con el apoyo de unas 1.200 cámaras comerciales e industriales, generando una adhesión casi unánime en todo el país, especialmente en el comercio y en el agro<sup>15</sup>. A diferencia de los dos últimos paros agrarios de 1975, la medida de APEGE no tuvo efectos materiales significativos. Los paros agrarios tuvieron una duración tal, 11 y 18 días, que generaron problemas de abastecimiento y el aumento en los precios de la carne, en un contexto económico ya signado por la hiperinflación y el desabastecimiento. No fue el caso del *lock out* del 16

de febrero. Sin embargo, el impacto político de la medida fue aún más significativo. El apoyo masivo de la burguesía al paro, y por ende, al programa golpista impulsado por APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático perdió el apoyo de la clase dominante. A su vez, la medida sirvió para medir el respaldo que aún conservaba el gobierno en la clase obrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el paro golpista ni a respaldar al gobierno, terminó de definir su suerte. El futuro golpe de estado tenía el respaldo de la clase dominante, y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad de los explotados.

Desde el fracaso del Plan Rodrigo, la Fuerza Social Contrarrevolucionaria comenzó su ofensiva final contra el régimen democrático. Durante la segunda mitad de 1975, los esfuerzos organizativos cuajaron en la formación de un partido, que llevó adelante la tarea de derrocar al gobierno democrático para eliminar las trabas que impedían a las Fuerzas Armadas liquidar militarmente a la insurgencia. El núcleo de este partido, como se observa en nuestra reconstrucción, fue APEGE. El partido del orden se organizó: se sumaron corporaciones, se discutió en asambleas el programa y el plan de lucha, y se enfrentó ideológicamente al programa rival, el reformismo encabezado por el gobierno peronista y la CGE. En ese proceso, el partido de la contrarrevolución fue creciendo, al calor de las distintas fracciones de la burguesía que sumaban su apoyo. Se tejieron los lazos con el personal técnico que llevaría a cabo las tareas planteadas, los militares. Y cuando todo estaba listo, se emprendió la ofensiva final contra el gobierno: el *lock out* del 16 de febrero. Esa demostración sirvió además como globo de ensayo: medir el apoyo de la burguesía al programa, y la pasividad de las clases dominadas que no salieron a enfrentar el paro golpista. Luego todo estaba dicho. Poco menos de un mes después, los militares se alzaron con el poder.

### La ofensiva contrarrevolucionaria de la burguesía chilena

El primer año de gobierno de Salvador Allende resultó bastante tranquilo en comparación con los dos que le siguieron. Apoyado en los altos precios del cobre en los mercados internacionales se logró un crecimiento alto de la economía, sostenido sobre la base de la utilización de la capacidad instalada, el alto nivel de reservas y la expansión del gasto público, que sirvió para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera, elevando salarios y reduciendo la desocupación. Esto tuvo su correlato en términos electorales: el caudal de votos de la Unidad

<sup>14</sup>La Nación, 29/1/76.

<sup>15</sup>La Nación, 16, 17 y 18/2/76.

Popular se elevó del 36% obtenido en las elecciones presidenciales, a más del 50% en las elecciones de abril de 1971. A su vez, se avanzó en el proceso de nacionalización de grandes empresas en sectores estratégicos, comenzando por la banca, las mineras y las telecomunicaciones, en manos, fundamentalmente, de capitales norteamericanos. Sin embargo, este proceso no se dio al ritmo programado e implicó algunas componendas, como la compra de acciones e indemnizaciones, que implicaron desembolsos no previstos. A pesar de ello, los capitales afectados rechazaron los términos de las nacionalizaciones, arrastrando a Chile a un duro enfrentamiento en el plano internacional. A su vez, se profundizó el proceso de tomas y expropiación de tierras, que ya había comenzado algunos años antes<sup>16</sup>.

Durante este primer año, Allende incluso llegó a contar con la simpatía de la fracción más pequeña de la burguesía, que se expresaban a través de la Asociación de la Pequeña y Mediana Industria (AMPICH) y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC)<sup>17</sup>. Las bases de este respaldo se encontraban en el propio programa con que asumió el gobierno de la Unidad Popular, que no planteaba expropiar o nacionalizar a la pequeña empresa, sino avanzar sobre los “monopolios”. Este sector se benefició, a su vez, de la reactivación económica. Sin embargo, los límites del proceso de nacionalizaciones nunca estuvieron claros, sobre todo porque fue acompañado de una movilización de bases y una profundización de la lucha de clases que afectaba a toda la burguesía por igual. Estos elementos fueron acercando las posiciones de las corporaciones de la burguesía pequeña y mediana a las de la gran burguesía industrial y agraria, nucleadas en la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) y en la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que tomaron las nacionalizaciones como una verdadera declaración de guerra<sup>18</sup>.

Las bases del crecimiento económico comenzaron a mostrar síntomas de agotamiento ya en 1971. La posibilidad de crecimiento sobre la capacidad instalada fue alcanzando su límite. El aumento del consumo disparó las importaciones, mientras que caía el ingreso de divisas por la baja en los precios internacionales del cobre. A la vez, los

préstamos e inversiones externas cesaron casi completamente. El ‘71 cerró con reservas agotadas y un déficit de balanza de pagos superior a los 300 millones de dólares. Comenzó a operar el estrangulamiento externo, que traería inflación y desabastecimiento<sup>19</sup>. Estas dificultades económicas no sólo eran producto de los límites de la economía chilena, sino también el efecto buscado por el imperialismo para ahogar el proceso chileno. Un verdadero bloqueo no declarado cayó sobre Chile, impulsado fundamentalmente por los capitales norteamericanos afectados por las nacionalizaciones, que buscaron limitar los créditos, las exportaciones y el abastecimiento de insumos y materias primas<sup>20</sup>.

Las debilidades económicas a las que se enfrentaba Allende desde los últimos meses fueron aprovechadas por la burguesía local para lanzarse a una ofensiva que siempre tuvo como objetivo cerrar el proceso, ya sea dentro de los marcos legales o mediante un golpe. La ofensiva contrarrevolucionaria se intensificó hacia fines de 1971: el primero de diciembre de ese año se produjo la primera gran manifestación de la derecha, la “marcha de las cacerolas”, encabezada por los partidos de oposición (PN y DC), y por las corporaciones de la burguesía<sup>21</sup>. La SOFOFA mantuvo una constante campaña de agitación, difundiendo informes económicos alarmistas a través de su centro de estudios e impulsando campañas de prensa a través de los medios bajo su control. También intentó organizar en torno suyo a pequeños y medianos empresarios a través de un Frente Nacional del Área Privada (FRENAP). Uno de sus hitos fue el “Encuentro del Área Privada”, el 2 de diciembre de 1971, convocado por SOFOFA, junto a CPC y SNA. Los discursos de Orlando Sáenz (presidente de SOFOFA) y Jorge Fontaine (presidente de CPC) señalaron que lo que estaba en juego ya no era el posicionamiento frente a las políticas económicas del gobierno, sino cómo defender los fundamentos del orden social mismo, “la propiedad privada en todas sus expresiones”, que se encontraba amenazada<sup>22</sup>.

La ofensiva contrarrevolucionaria se desarrolló en varios frentes. Por un lado, en la calle: desde fines de 1971 las movilizaciones contra Allende, encabezadas por los partidos de la oposición burguesa, y los

<sup>16</sup>Valenzuela Feijóo, J.: “El gobierno de Allende: aspectos económicos”, en *Aportes*, año/vol. XI, n° 33, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, 2006; Castells, M.: *La lucha de clases en Chile*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1975.

<sup>17</sup>Castells, op. cit., pp. 211-212; Campero, G.: “La relación entre el Gobierno y los grupos de presión: el proceso de la acción de bloques a la acción segmentada”, *Revista de Ciencia Política*, vol. XXIII, n° 2, 2003.

<sup>18</sup>Campero, op. cit.; Castells, op. cit.

<sup>19</sup>Valenzuela Feijóo, op. cit.

<sup>20</sup>Castells, op. cit., pp. 188-189.

<sup>21</sup>Arrate, J. y E. Rojas: *Memoria de la izquierda chilena*, Javier Vergara Editor, Santiago de Chile, 2003; Harnecker, M.: *La lucha de un pueblo sin armas (los tres años de gobierno popular)*, www.rebellion.org, 2006.

<sup>22</sup>Campero, op. cit.

lock out parciales, convocados por distintas corporaciones de la burguesía, se sucedieron a un ritmo vertiginoso. La ofensiva fue agitada desde los órganos de prensa opositores, periódicos de alcance nacional, como *El Mercurio*, radios y canales de televisión, que incitaron abiertamente a la sedición y magnificaron la crisis. A su vez, se bloqueó todo avance de la UP dentro de los marcos de la legalidad burguesa. “Con el Parlamento votando sistemáticamente en contra, con la Contraloría [General de la República, órgano de control administrativo] alegando ilegalidad de las decisiones presidenciales, con la Magistratura cubriendo abiertamente la sedición”, el gobierno se vio maniatado, señala Castells<sup>23</sup>. Por último, la ofensiva fue acompañada de una ola de atentados y por disturbios callejeros, ejecutados por comandos paramilitares abiertamente fascistas, como Patria y Libertad (PyL) y el Comando Rolando Matus, que contaron con el apoyo de oficiales golpistas de las Fuerzas Armadas y eran financiados por la gran burguesía<sup>24</sup>.

La ofensiva se desarrolló coordinadamente en todos los frentes, lo que lleva a pensar en la existencia de una dirección unificada de la contrarrevolución. Cierta información que ha trascendido nos permite afirmar que los contactos entre las organizaciones corporativas (los “gremios”), los partidos opositores, la justicia y los comandos fascistas eran bastante fluidos, y la coordinación de las acciones no era casual. El 4 de marzo de 1972, por ejemplo, se produjo una reunión de la que participaron los máximos dirigentes de la burguesía y de los colegios profesionales, el Ministro de la Corte Suprema, junto a dirigentes de PN, DC y PyL. Algunas de las reflexiones que se sostuvieron en la reunión trascendieron a la prensa: “Nuestra democracia, nuestra libertad, los derechos humanos están seriamente amenazados [...] Todo el que participe [de este] modo de pensar [...] tiene la obligación de actuar con decisión y valentía. Ante esta situación no cabe la cobardía ni el desaliento. Es la hora de la acción”<sup>25</sup>.

Pero la ofensiva contrarrevolucionaria encontró una respuesta y un límite en la movilización de las masas: las manifestaciones de la derecha comenzaron a ser rebatidas por marchas de apoyo al Gobierno que las superaban en convocatoria. A pesar de la disposición al combate de

sus partidarios, el Gobierno comenzó a ceder posiciones: el ministro de Economía Vuscovic, que encabezó la ofensiva nacionalizadora, fue reemplazado por Orlando Millas, dirigente del PC, que planteaba la necesidad de “consolidar lo actuado” y no seguir avanzando, evitando el enfrentamiento con la burguesía. La línea del PC, que buscaba conciliar con una fracción de la burguesía, negociar con la DC, mantenerse dentro de los marcos de la legalidad burguesa y evitar medidas que quiten el apoyo de la fracción legalista de las Fuerzas Armadas, hegemónizó el gobierno. Siguiendo esta línea, la dirección de la UP intentó contener la movilización de las masas para evitar que el enfrentamiento con los golpistas desate la guerra civil<sup>26</sup>.

Mientras tanto, la contrarrevolución continuó organizándose en todos los frentes. En julio de 1972, la DC y el PN formalizaron su unión con la presentación de un frente común, la Confederación Democrática (CODE), a las elecciones de Coquimbo. La muerte de un comerciante de Punta Arenas, que falleció de un paro cardíaco tras los enfrentamientos con la policía en una manifestación, abrió un nuevo ciclo de enfrentamientos. En forma inmediata, estallaron cacerolazos de repudio en la zona. Las corporaciones de comercio (CPC y la Confederación del Comercio Detallista y Turismo, CONFEDECH) declararon un *lock out* nacional por 24 horas para el 21 de agosto. Las corporaciones de la gran burguesía, SOFOFA, SNA y la Cámara Chilena de la Construcción, declararon su respaldo a la medida de fuerza<sup>27</sup>.

Paralelamente, se creó la Confederación Nacional de Transporte Terrestre (CNTT), que reunió a los dueños de camiones, taxis y autobuses. En la primera semana de septiembre, los transportistas plantearon demandas unificadas por aumento de tarifas y mejoras en el abastecimiento de repuestos y vehículos, y amenazaron con concurrir a un *lock out* si el gobierno no las satisfacía. De conjunto, la derecha lanzó una campaña propagandística destinada a magnificar la escasez y los problemas económicos. Los grupos terroristas hicieron lo propio en las calles y las manifestaciones opositoras se multiplicaron. Todo parecía parte de un plan general destinado a derrocar al Gobierno, que Allende salió a denunciar el 14 de septiembre. El eje central de lo que el presidente denominó “Plan Septiembre” sería un *lock out* del transporte terrestre y marítimo, destinado a cortar los abastecimientos

<sup>23</sup>Castells, op. cit., pp. 14-15.

<sup>24</sup>A su vez, la dirección de PyL estaba integrada por dirigentes de las corporaciones burguesas, como el presidente de la SNA, Benjamín Matte (*Chile Hoy*, 9/3/73, 23/3/73, 11/5/73, 18/5/73 y 17/8/73).

<sup>25</sup>La reunión fue denunciada por el Presidente Allende y su existencia reconocida por los propios asistentes (*Chile Hoy*, 27/10/72 y 23/3/73).

<sup>26</sup>Harnecker, op. cit., pp. 13-28.

<sup>27</sup>Bitar, S.: *Chile 1970-1973. Asumir la historia para construir el futuro*, Pehuén, Santiago de Chile, pp. 170-177, 1995; Harnecker, op. cit.; *Chile Hoy*, 20/10/72.

y paralizar la economía. El complot tenía ramificaciones dentro de las Fuerzas Armadas, donde algunos núcleos de oficiales preparaban un golpe de estado.

La oportuna denuncia, la respuesta de las masas y las acciones que emprendió el gobierno (la destitución del General Canales por actitudes sediciosas), frustraron los planes de la contrarrevolución y la obligaron a posponerlos<sup>28</sup>. Sin embargo, poco tardaron en reanudar la ofensiva. A comienzos de octubre, se desplegó una campaña en favor del alza de precios de la única empresa productora de papel. Apoyaron la petición, presentada como una defensa de la libertad de expresión, SOFOFA, SNA, CPC y CNTT. Por otro lado, la minera norteamericana Kennecott presentó querellas en distintos países de Europa demandando el embargo de los embarques de cobre chileno, en desacuerdo con los términos de su nacionalización. Un tribunal francés acogió el pedido, y el gobierno de Allende suspendió temporalmente los embarques de cobre a Francia, acentuando las dificultades económicas. Una semana después, la minera consiguió un embargo en tribunales holandeses.

El 6 de octubre el Senado, con mayoría opositora, acusó al gobierno de ilegítimo. Un día después, León Vilarín, dirigente de la corporación de dueños de camiones de carga, anunció un *lock out* nacional de transportistas que comenzaría el 11 de octubre. Los camioneros habían llegado previamente a un acuerdo con el gobierno, que se había comprometido a atender sus demandas. Sin embargo, el 7 de octubre convocaron al paro denunciando la intención oficial de crear un sistema de transporte estatal en la provincia de Aysén. Claramente, se trataba de una excusa. El 10 de octubre se realizó una inmensa concentración opositora en La Alameda. Al día siguiente los titulares de los diarios de derecha anunciaron la llegada de “La hora de la acción” y “El comienzo de la resistencia civil”, recogiendo declaraciones de Onofre Jarpa (titular del PN), quien señaló que “Chile inició la resistencia civil contra el comunismo”<sup>29</sup>.

Rápidamente, el *lock out* adquirió un alcance nacional: la decisión del gobierno de detener a los dirigentes transportistas profundizó el conflicto. Los camioneros bloquearon las rutas, atacando a los que no se plegaron a la medida, y se agudizó el desabastecimiento de productos esenciales. La SNA y la SOFOFA salieron a respaldar el paro patronal, y el 14 de octubre la DC se pronunció a favor. Dirigentes

<sup>28</sup>Bitar, op. cit.; Harnecker, op. cit.

<sup>29</sup>Idem.

de las corporaciones empresariales de dueños de autobuses, taxis, distribuidores de combustible, el comercio y la pequeña industria (CPC y CONFEDECH) decidieron sumarse al paro. También lo hicieron algunas fracciones de la clase obrera, bajo la dirección de la DC. El 17 de octubre adhirieron al paro el Colegio Médico y la Federación de Estudiantes Secundarios, controlada también por la DC. Poco después se sumó el Colegio de Abogados<sup>30</sup>.

Paralelamente, el PN y la DC redoblaron la apuesta en los órganos legislativos, promoviendo acusaciones constitucionales contra el presidente y sus ministros. En la calle, las manifestaciones opositoras se produjeron diariamente, junto con los destrozos, el vandalismo y los atentados. En el medio rural se recrudecieron los ataques impulsados por la gran burguesía y los terratenientes. Como determinaron las investigaciones posteriores del Senado norteamericano, la CIA financió el *lock out* aportando varios millones de dólares, que permitieron sostenerlo hasta el 6 de noviembre<sup>31</sup>.

El 20 de octubre quienes impulsaron el movimiento formaron el Comando Nacional de Defensa Gremial, que unificó sus reclamos en un documento denominado “Pliego de Chile”. El documento contenía, además de las demandas de los transportistas, la exigencia de suspender la clausura de radios opositoras, promulgar la reforma constitucional impulsada por la DC que regimentaba y limitaba las nacionalizaciones, y disolver todas las organizaciones populares encargadas de supervisar la distribución de bienes de consumo. Una plataforma que puso sobre la mesa que los reclamos de los transportistas nunca fueron gremiales, sino que apuntaban a la destitución del Gobierno. Desde el vamos, la intencionalidad política de los propietarios de camiones quedó clara en su actitud ante la negociación: fueron postergando todo acuerdo esperando que se sumaran otras corporaciones, las proposiciones del gobierno fueron aceptadas y luego rechazadas, agregando semana a semana nuevas peticiones<sup>32</sup>.

Sin embargo, hacia fines de octubre el *lock out* comenzó a mostrar sus límites. Las masas se movilizaron para desbaratar el paro patronal e impedir el golpe. Se logró mantener en funcionamiento el país en un nivel razonable de actividad. Las masas organizaron la distribución y la producción, tomando medio centenar de establecimientos

<sup>30</sup>Harnecker, op. cit.; Bitar, op. cit., Campero, op. cit.; *Chile Hoy*, 27/10/72 y 23/3/73.

<sup>31</sup>Sesler, G.: *De cómo Nixinger desestabilizó a Chile*, Buenos Aires, Hernández Editor, 1975, pp. 65-75; Bitar, op. cit.; *Chile Hoy*, 27/10/72.

<sup>32</sup>Bitar, op. cit.; Arrate y Rojas, op. cit.; Campero, op. cit.

abandonados por sus patrones. La experiencia política de las masas durante el conflicto implicó un salto cualitativo en términos organizacionales, en su nivel de lucha y en su conciencia del proceso: hicieron funcionar el país durante un mes sin sus patrones, derrotando así el lock out de transportistas y comerciantes. Allí se gestaron nuevas formas de organización, aunque embrionarias y minoritarias: los Cordones Industriales, los Comandos Populares, las Juntas de Aprovisionamiento Popular (JAP) y los Consejos Campesinos. Estas formas embrionarias de doble poder fueron boicoteadas por el PC, dirección de la Unidad Popular. Sus dirigentes plantearon que apoyar a los Cordones Industriales implicaría dividir al movimiento obrero, que ya se organizaba en la CUT<sup>33</sup>.

La determinación de los trabajadores a ocupar los establecimientos que se plegaban al *lock out* impuso un límite a la profundización del paro: es por esta razón que la gran burguesía impulsó la medida de fuerza, pero no se sumó efectivamente. Por otro lado, el mantenimiento de la actividad y del abastecimiento a través de la organización de las masas, restó efectividad a la medida, que no logró desestabilizar al gobierno hasta el punto de conseguir un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Por último, la reacción de las masas alertó a un sector de la burguesía, que temiendo el revés que pudiera sufrir si se extendía la movilización y la agitación en las bases, comenzó a buscar una salida de transacción<sup>34</sup>.

El conflicto se cerró con el ingreso de los altos mandos militares al gabinete, entre ellos el General Prats, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Desde su cargo de Ministro del Interior, Prats intimó a los patrones a deponer su actitud sediciosa. Al día siguiente, 6 de noviembre, finalizó el lock out. Sus cabecillas aceptaron las condiciones que el propio Allende había ofrecido semanas antes. A pesar de que se logró detener la ofensiva golpista, el ingreso de los militares al gabinete, negociado con la DC, implicó una transacción con la contrarrevolución en uno de sus momentos de mayor debilidad. Cuando la organización de las masas planteaba la posibilidad de una contraofensiva que permitiera aplastarla, Allende y el PC optaron, nuevamente, por la conciliación<sup>35</sup>.

La ofensiva golpista se renovó a comienzos del '73. Ya desde enero, la Contraloría, el Poder Judicial y Parlamento iniciaron una serie de ataques al gobierno. Además de paralizar toda iniciativa, empezaron a acusarlo sistemáticamente de violaciones a la Constitución y de ilegitimidad<sup>36</sup>. En abril, la oposición logró romper la unidad de la clase obrera, promoviendo la huelga de una fracción que respondía a la DC en la mina de cobre "El teniente". La huelga comenzó el 22 de abril y duró 76 días. El conflicto fue acompañado por una ola de atentados y manifestaciones estudiantiles en contra del proyecto gubernamental de reforma educativa. En las manifestaciones se produjeron disturbios, ataques a edificios oficiales, diarios de izquierda, locales partidarios y domicilios particulares de los ministros. Entre el 22 y el 29 de mayo, los transportistas volvieron al *lock out*<sup>37</sup>. La Central Única de Trabajadores salió a enfrentar a la contrarrevolución, convocando a un paro nacional con movilización en defensa del gobierno para el 21 de junio. Su presidente amenazó con resistir cualquier intento de golpe, y exigió del gobierno mano dura con los sediciosos<sup>38</sup>.

El 29 de junio se produjo un intento de golpe militar: se sublevó el Regimiento Blindado nº 2 del Ejército, que atacó el palacio de La Moneda con tanques. Contó con el apoyo civil de PyL, cuyos dirigentes, luego del fracaso de la intentona, se refugiaron en las embajadas de Ecuador y Colombia. El golpe fue frenado por la acción popular y la intervención decidida de la fracción leal del Ejército, encabezada por Prats. La CUT llamó a la ocupación de las fábricas y lugares de trabajo, las organizaciones estudiantiles en manos de la izquierda se movilizaron y los Cordones Industriales respondieron ocupando posiciones en sus zonas de influencia. Derrotado el intento golpista, la dirección de la UP volvió a convocar al diálogo con la DC, que puso como condición la devolución de las empresas tomadas, la disolución de los grupos armados y el ingreso de los jefes militares al gabinete. En medio, los transportistas lanzaron un nuevo lock out, que comenzó el 25 de julio, y se incrementaron los atentados terroristas. Finalmente, el intento de diálogo se rompió y la oposición en pleno se lanzó a impulsar el golpe.

La actitud de los transportistas fue abiertamente golpista: el paro se inició a pesar de que el Segundo Congreso Nacional de Transporte Terrestre, tres días antes, había votado un plazo de 15 días para negociar con el gobierno. De hecho, comenzó a prepararse desde el 23 de

<sup>33</sup>Arrate y Rojas, op. cit.

<sup>34</sup>Arrate y Rojas, op. cit., Castells, op. cit.; Bitar, op. cit.

<sup>35</sup>García, P.: *Las Fuerzas Armadas y el golpe de estado en Chile*, Siglo XXI, México, 1974, pp. XXVIII-XXXI; Harnecker, op. cit.; Bitar, op. cit.

<sup>36</sup>*Chile Hoy*, 18/5/73; Harnecker, op. cit.

<sup>37</sup>*Chile Hoy*, 1/6/73.

<sup>38</sup>Harnecker, op. cit., pp. 50-51.

julio, a pesar de que Allende había anticipado la disposición a acoger sus peticiones. Desde esa fecha, los patrones comenzaron a ocultar sus vehículos para evitar su requización<sup>39</sup>. La DC salió a respaldar el paro patronal el 12 de agosto. Los comerciantes también apoyaron con lock outs parciales, como el paro de 48 horas convocado por la CONFEDECH para el 5 de septiembre. Otros sectores de la pequeña burguesía, como los médicos, fueron a la huelga por tiempo indeterminado<sup>40</sup>. El paro de la patronal transportista, que se extendió hasta el golpe del 11 de septiembre, fue acompañado por bloqueos de rutas, enfrentamientos y una ola de atentados y sabotajes. Los blancos predilectos fueron las instalaciones eléctricas, los oleoductos, las vías férreas y los vehículos que no se sumaron al paro.

El 8 de agosto, en un intento por poner fin al *lock out*, Allende volvió a ensayar la receta de formar un gabinete con los altos mandos militares. La diferencia, esta vez, fue que algunos de los generales convocados estaban involucrados en los preparativos del golpe.

Desde la fallida sublevación de junio, las Fuerzas Armadas comenzaron un proceso de depuración de sus filas, deteniendo, torturando y amedrentando a los sectores legalistas. También comenzaron una ofensiva represiva contra las plazas conquistadas por la izquierda. Utilizando la Ley de Control de Armas, que otorgaba a las Fuerzas Armadas la potestad de intervenir en la seguridad interior para requisar armas en manos de la población civil, intensificaron los allanamientos en fábricas, comunas y locales sindicales, aplicando torturas y detenciones ilegales. La acción de las Fuerzas Armadas buscaba aterrorizar y desmoralizar a la población, desbaratando su organización para minimizar cualquier resistencia al golpe<sup>41</sup>.

Finalmente, una serie de intervenciones del Parlamento allanará el camino en las últimas semanas. El 14 de agosto, senadores de la DC acusaron al gobierno de “inconstitucional”. Un día después tocará el turno al PN, que denunció que el gobierno era “ilegítimo”. El 22 de agosto la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de acuerdo que planteaba que “El Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta”. Y se emplazaba a las FFAA a “poner de inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas”, so pena

<sup>39</sup>Harnecker, op. cit.

<sup>40</sup>*Chile Hoy*, 7/9/73.

<sup>41</sup>Campero, op. cit.; Harnecker, op. cit.; Arrate y Rojas, op. cit.

de desahuciar su propio “carácter nacional y profesional”<sup>42</sup>. La declaración no tuvo efectos jurídicos, pero sí políticos: operaba sobre las FFAA para que se resuelvan a dar el golpe. El último obstáculo, los generales legalistas, renunciaron en esa semana. El último, Carlos Prats, lo hizo el 24 de septiembre, dejando paso a Augusto Pinochet, su sucesor. La renuncia de Prats blanquea una realidad: dentro de las Fuerzas Armadas, los golpistas habían ganado la pulseada y se aprestaban a desplazar a Allende. Así sucedió el 11 de septiembre, y fue seguido por una represión gigantesca, destinada a restaurar el orden y aniquilar a quienes habían impulsado el proceso revolucionario que se cerró con esta derrota.

## Conclusiones

El estudio de los casos de Chile y Argentina muestra que las burguesías locales no sólo apoyaron los golpes de estado, sino que se organizaron para intervenir decididamente en la lucha política, impulsando las salidas contrarrevolucionarias que pusieron fin a los procesos abiertos a fines de los ‘60. En ambos casos, se observa un hecho poco común: la burguesía recurriendo a la acción directa, con *lock outs*, movilizaciones y armando grupos paramilitares. El objetivo queda claro: desestabilizar a los gobiernos para instaurar regímenes propicios para desarrollar una tarea que quedó en manos de los aparatos represivos del Estado: liquidar la insurgencia. Tamaña movilización de la clase dominante sólo se explica bajo las condiciones particulares que se vivían: la apertura de procesos revolucionarios que pusieron en juego las propias bases del sistema capitalista.

Recibido: 8/2/2011 Aceptado: 17/5/2011

<sup>42</sup>García, op. cit., p. XLIV.